

## **IRLANDA**

### **EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS**

#### **(LEY 24/2013, SOBRE LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS)<sup>1</sup>**

**Mercedes Vidal Gallardo**

Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado  
Universidad de Valladolid

Esta Ley viene a dar cumplimiento a determinadas disposiciones de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 5 de abril de 2011 relacionadas con la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, así como la protección de sus víctimas, en sustitución de la Decisión Marco del Consejo de Europa sobre la misma materia<sup>2</sup>. En el mismo sentido, modifica la Ley irlandesa de 2008 sobre la trata de seres humanos y la Ley de 1992 sobre tráfico y pornografía infantil.

La trata de seres humanos constituye una violación de los derechos humanos y una forma moderna de esclavitud. La nueva Directiva adoptada por la Unión Europea establece una serie de normas mínimas comunes relativas a la definición de las infracciones y de las sanciones en el ámbito de esta conculcación de derechos. Esta forma de atentado contra la dignidad humana está expresamente prohibida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de manera que la lucha contra esta práctica se ha convertido en una de las prioridades del Programa de Estocolmo que adopta una definición amplia de este fenómeno, englobando otras formas de explotación.

---

<sup>1</sup> Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación "Solidaridad, participación y convivencia en la diversidad", DER2013-42261-P

<sup>2</sup> Esta nueva Directiva sustituye a la Decisión Marco 2002/629/JAI relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.

La Ley irlandesa 24/2013 tiene por objeto dar respuesta a las exigencias que la Directiva Comunitaria Europea de 2011 impone a los Estados miembros, asumiendo los siguientes compromisos:

- a) desalentar la demanda de estas conductas mediante la educación y la formación;
- b) llevar a cabo campañas de información y concienciación;
- c) formar a los funcionarios que pudieran entrar en contacto con víctimas de la trata;
- d) adoptar las medidas necesarias para conferir el carácter de infracción penal al hecho de utilizar los servicios sexuales o de similares características, proporcionados por una persona víctima de la trata.

Con la finalidad de adaptar las disposiciones de la Ley de 2008 sobre la trata de seres humanos a lo establecido en esta Directiva comunitaria, la Ley 24/2013 sanciona la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, con fines de explotación. El concepto de explotación se entiende en un sentido amplio, comprensivo, entre otros, de los siguientes comportamientos:

- a) la explotación para la prostitución, u otras formas de explotación sexual;
- b) el trabajo o los servicios forzados (incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos).

Se debe entender producida la explotación cuando se ha ejercido una coacción sobre la persona, o bien se ha empleado amenaza o utilizado la fuerza, el rapto, el fraude o el engaño, independientemente de que la víctima haya dado su consentimiento. Cuando la víctima sea menor de edad, estos actos de explotación serán muestra automáticamente de la

trata de seres humanos, aunque no se emplee ninguno de los medios de coacción antes citados.

La Ley de 2013 sanciona tanto la incitación a la trata de seres humanos, como la participación, la complicidad y la tentativa para la realización de este tipo de conductas, si bien se consideran más reprobables este tipo de infracciones si concurre alguna de estas circunstancias:

- a) se ha cometido contra una víctima particularmente vulnerable (los menores siempre forman parte de esta categoría);
- b) se ha cometido en el marco de una organización delictiva;
- c) se ha puesto en peligro, de forma deliberada o por grave negligencia, la vida de la víctima;
- d) se ha cometido el acto empleando violencia grave o éste ha causado daños particularmente graves.

Las personas jurídicas también podrán considerarse responsables si las infracciones se cometen en su beneficio por cualquier persona que ostente un cargo directivo. Lo mismo ocurrirá si la falta de supervisión o control posibilita que una persona sometida a la autoridad de otra cometa estas infracciones.

La Directiva 2011/36/UE permite a los Estados miembros decidir no enjuiciar ni sancionar a las víctimas de la trata de seres humanos por su participación en las actividades delictivas a las que se hayan visto obligadas y esta es la opción por la que se ha decantado la Ley irlandesa de 2013 que regula esta materia.

En cuanto al procesamiento de los autores de las infracciones, en la misma línea de la legislación de otros Estados miembros de la UE, la Ley de Irlanda establece la posibilidad de procesar a sus nacionales por las infracciones cometidas en otros países de la UE y de recurrir a medios de investigación característicos de la lucha contra la delincuencia organizada, como las escuchas telefónicas.

Esta norma sigue las directrices que marca una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Comunicación en la que se establece la estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016<sup>3</sup>. Este instrumento diseñada una serie de medidas concretas que faciliten la transposición y puesta en práctica de la Directiva 2011/36/UE, añadiendo valor y complementando el trabajo realizado por los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, tanto en los países comunitarios como en terceros países. La estrategia identifica cinco prioridades en las que la UE debe centrarse:

- a) identificar, proteger y aportar asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos;
- b) reforzar la prevención de la trata de personas;
- c) aumentar la presión legal sobre los autores;
- d) intensificar la coordinación y cooperación entre los actores clave y la coherencia de las políticas;
- f) aumentar el conocimiento sobre las preocupaciones emergentes relacionadas con todas las formas de trata de personas y dar respuestas efectivas<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> [COM (2012) 286 final – No publicado en el Diario Oficial].

<sup>4</sup> Dentro de las prioridades anteriores, la Comisión subraya una serie de acciones que propone poner en práctica a lo largo de los próximos cinco años en los países de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, las instituciones y agencias de la UE, organizaciones internacionales y en la sociedad civil y el sector privado de terceros países. Vid., Decisión de la Comisión 2007/675/CE, de 17 de octubre de 2007, por la que se crea el Grupo de expertos en la trata de seres humanos [DO L 277 de 20.10.2007]. Plan de la UE sobre mejoras prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla [Diario Oficial C 311 de 9.12.2005].

**ANEXO**  
**CRIMINAL LAW (HUMAN TRAFFICKING) (AMENDMENT)**  
**ACT 2013**

---

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

1. Amendment of section 1 of Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008.
  2. Amendment of Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008.
  3. Amendment of Child Trafficking and Pornography Act 1998.
  4. Amendment of Criminal Evidence Act 1992.
  5. Short title and commencement.
- 

[No. 24.] *Criminal Law (Human Trafficking) [2013.] (Amendment) Act 2013.*

Acts Referred to

Child Trafficking and Pornography Act 1998 1998, No. 22  
Criminal Evidence Act 1992 1992, No. 12  
Criminal Justice (Public Order) Act 2011 2011, No. 5  
Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 2008, No. 8  
Criminal Procedure Act 1967 1967, No. 12  
Ethics in Public Office Act 1995 1995, No. 22

---

*Number 24 of 2013*

---

**CRIMINAL LAW (HUMAN TRAFFICKING) (AMENDMENT)**  
**ACT 2013**

---

AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN PROVISIONS OF DIRECTIVE 2011/36/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 5 APRIL 2011 ON PREVENTING AND COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AND

PROTECTING ITS VICTIMS, AND REPLACING COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2002/629/JHA; FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE CRIMINAL LAW (HUMAN TRAFFICKING) ACT 2008, THE CHILD TRAFFICKING AND PORNOGRAPHY ACT 1998 AND THE CRIMINAL EVIDENCE ACT 1992; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

[9th July, 2013]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

1.—Section 1 of the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 is amended—

(a) by substituting the following definition for the definition of “exploitation”:

“ ‘exploitation’ means—

(a) labour exploitation,

(b) sexual exploitation,

(c) exploitation consisting of the removal of one or more of the organs of a person, or

(d) exploitation consisting of forcing a person to engage in—

(i) an activity that constitutes an offence and that is engaged in for financial gain or that

by implication is engaged in for financial gain, or

(ii) an activity in a place other than the State that— 10J No. L101 of 15.4.2011, p. 1

3

Amendment of section 1 of Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008. S.1

4

(I) constitutes an offence under the law of that place and would, if done in the State, constitute an offence, and (II) is engaged in for financial gain or that by implication is engaged in for financial gain;”,

(b) by substituting the following definition for the definition of “labour exploitation”:

“ ‘labour exploitation’ means, in relation to a person (including a child)—

(a) subjecting the person to forced labour (including forcing him or her to beg),

(b) forcing the person to render services to another person, or (c) enslavement of the person or subjecting him or her to servitude or a similar condition or state;”

and

(c) by inserting the following definitions:

“ ‘beg’ has the same meaning as it has in section 1(2) of the Criminal Justice (Public order) Act 2011;

‘forced labour’ means a work or service which is exacted from a person under the menace of any penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily, but shall not include any of the following:

(a) a work or service exacted by virtue of compulsory military service laws for work of a purely military character;

(b) a work or service which forms part of the normal civic obligations of the citizens of a fully self-governing country;

(c) a work or service exacted from a person as a consequence of a conviction in a court of law if—

(i) the work or service is carried out under the supervision and control of a public authority, and

(ii) the person is not hired to, or placed at the disposal of, a person who is not a public authority;

(d) a work or service exacted in a case of an emergency that endangers or that may endanger the existence or the well-being of the whole or part of the population, including war, fire, flood, famine, earthquake, violent epidemic or epizootic diseases or invasion by animal, insect or vegetable pests;

(e) a minor communal service of a kind which, being performed by the members of the community in the direct interest of the community, can be considered as a normal civic obligation incumbent upon the members of the community, and where the members of the community, or their direct representatives, have the right to be consulted in regard to the need for that service;”.

2.—The Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 is amended by inserting the following section after section 4:

“Aggravating factor: offences under section 2 or 4 committed by public official during Performance of duties.

4A.—(1) Where a court is determining the sentence to be imposed on a person for an offence under section 2 or 4, the fact that the offence was committed by a public official during the performance of his or her duties as such public official shall be treated for the purpose of determining the sentence as an aggravating factor.

(2) Accordingly, the court shall (except where the sentence for the offence is one of imprisonment for life or where the court considers that there are exceptional circumstances justifying its not doing so) impose a sentence that is greater than that which would have been imposed in the absence of such factor.

(3) The sentence imposed shall not be greater than the maximum sentence permissible for the offence.

(4) In this section— ‘public body’ shall be construed in accordance with the Ethics in Public Office Act 1995; ‘public official’ means an officer or employee of a public body.”.

3.—The Child Trafficking and Pornography Act 1998 is amended by inserting the following section after section 3:

“Aggravating factor: certain offences under section 3 committed by public official during performance of duties.

3A.—(1) Where a court is determining the sentence to be imposed on a person for an offence under section 3 (other than an offence under subsection (2A) or (2B) of that section), the fact that the offence was committed by a public official during the performance of his or her



duties as such public official shall be treated for the purpose of determining the sentence as an aggravating factor.

(2) Accordingly, the court shall (except where the sentence for the offence is one of imprisonment for life or where the court considers that 5 S.1 Amendment of Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008. Amendment of Child Trafficking and Pornography

Act 1998. S.3 Amendment of Criminal Evidence Act 1992. There are exceptional circumstances justifying its not doing so) impose a sentence that is greater than that which would have been imposed in the absence of such factor.

(3) The sentence imposed shall not be greater than the maximum sentence permissible for the offence.

(4) In this section—

‘public body’ shall be construed in accordance with the Ethics in Public Office Act 1995;

‘public official’ means an officer or employee of a public body.”.

4.—The Criminal Evidence Act 1992 is amended—

(a) in section 15—

(i) in subsection (1), by substituting the following paragraphs for paragraphs (a), (b) and (c):

“(a) under Part IA of the Criminal Procedure Act 1967, the prosecutor consents to the sending forward for trial of an accused person who is charged with an offence to which this Part applies,

(b) the person in respect of whom the offence is alleged to have been committed, or a person who has made a videorecording under section 16(1)(b)(ii), is under 18 years of age on the date consent is given to the accused being sent forward for trial, and

(c) it is proposed that a videorecording of a statement made by the person concerned during an interview as mentioned in section 16(1)(b) shall be given in evidence pursuant to that section,”,

and

(ii) by substituting the following subsection for subsection (2):

“(2) The judge hearing an application under section 4E of the Criminal Procedure Act 1967 may consider any statement made, in relation to an offence, by a person in a videorecording mentioned in section 16(1)(b) if the person is available for cross-examination at the hearing of the application.”,

(b) in section 16(1), by substituting the following paragraph for paragraph (b):

“(b) a videorecording of any statement made during an interview with a member of the Garda Síochána or any other person who is competent for the purpose—

(i) by a person under 14 years of age (being a person in respect of whom such an offence is alleged to have been committed), or

(ii) by a person under 18 years of age (being a person other than the accused) in relation

to an offence under—

(I) section 3(1), (2) or (3) of the Child Trafficking and Pornography Act 1998, or

(II) section 2, 4 or 7 of the Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008,”,

and

(c) in section 19, by substituting “16(1)(a) and (b)(ii) to a person under 18 years of age and the reference in section 16(1)(b)(i)” for “16(1)(a) to a person under 18 years of age and the reference in section 16(1)(b)”.

**5.—(1)** This Act may be cited as the Criminal Law (Human Trafficking) (Amendment) Act 2013.

(2) This Act shall come into operation one month after its passing.